



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

FSM 33000384/2011/TO1

San Martín, 30 de agosto de 2024.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver sobre las solicitudes de extinción de la acción penal formuladas en favor de los imputados **HECTOR DANIEL BENÍTEZ** (argentino, titular del D.N.I. N° 13.783.446, nacido el 26 de agosto de 1960 en la provincia de Córdoba, hijo de Eustaquio e Irma Olinos, casado, contador público y domiciliado en la calle Virrey Arredondo 2260, piso 11 de C.A.B.A.), **CÉSAR LUIS GALEANO** (argentino, titular del D.N.I. N° 24.484.689, nacido el 6 de febrero de 1975 en C.A.B.A., hijo de Raúl Oscar y Alicia Carmen Massarotti, soltero, contador público y domiciliado en la calle Libertador 36, piso 6to. "A" de Vicente López, provincia de Buenos Aires), **MARÍA DEL CARMEN SANTELLÁN** (argentina, titular del D.N.I. N° 10.090.368, nacida el 23 de julio de 1951 en C.A.B.A., hija de Marcos Francisco y María Carmen Génova, de estado civil casada, ama de casa y domiciliada en la calle Manuel A. Fernández 586 de Temperley, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires), **HORACIO EMILIO BOSCHETTO** (argentino, titular del D.N.I. N° 4.363.490, nacido el 6 de octubre de 1940 en C.A.B.A., hijo de Pedro Emilio y Elda Barros, escribano y domiciliado en la calle Juan Zufriategui 685, 10mo. "B" de Vicente López, provincia de Buenos Aires), **DIANA MIRIAM APRILANTI** (argentina, titular del D.N.I. N° 13.481.407, nacida el 13 de noviembre de 1957 en C.A.B.A., hija de Francisco Gabriel y Angela Aydeé Brusessi, casada, ama de casa y domiciliada en la calle Robertson 581 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), **WANDA GEORGINA CANTISANO** (argentina, titular del D.N.I. N° 24.910.212, nacida el 26

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

de septiembre de 1975 en C.A.B.A., hija de Ricardo y Lidia Salay, empleada y domiciliada en la calle Padilla 876 2do. "2" de C.A.B.A.), **MIRYAM GRACIELA NÚÑEZ** (argentina, titular del D.N.I. N° 13.599.524, nacida el 10 de mayo de 1963 en la provincia de Córdoba, hija de Agustín Joaquín Del Rosario y Adela Pedernera, empleada gastronómica, divorciada y domiciliada en la calle Larrea 673 piso 4to. "9" de C.A.B.A) y **HEBE LEONOR COLLI** (argentina, D.N.I. N° 18.130.528, nacida el 6 de junio de 1961, hija de Eraldo y Francisca Ignacia Masachese, domiciliada en la calle Billinghamurst n° 1153, 6to piso, departamento "B", de la ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la presente **causa nro. FSM 33000384/2011/TO1 y su acumulada FSM 33000384/2011/TO2 (Registros internos 3641 y 3752)** del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de San Martín.

RESULTA:

I. Que la defensa técnica de Héctor Daniel Benítez presentó un escrito solicitando la declaración de la extinción de la acción penal respecto de su defendido.

En esa oportunidad, sostuvo que "en autos se imputa a Daniel Benítez el delito de simulación dolosa de pago previsto por el art. 11 de la derogada ley 24.769 (ver requerimiento fiscal de elevación a juicio), según la cual poseía una pena entonces de entre 2 y 6 años de prisión. Cabe señalar que en la presente causa la querella particular hubo desistido, 1 encontrándose vigente únicamente la querella por parte de la AFIP que, a todas luces, debería ser consecuentemente apartada. Que el 8 de julio de 2024 el Honorable Congreso de la Nación ha dispuesto una amnistía al disponer que se encuentra extinta la acción penal de pleno derecho cuando las obligaciones se encuentran pagadas."

Sobre esa base, adjuntó los artículos de la ley 27.743 y adunó que "tal y como se encuentra acreditado y no controvertido en autos, la obligación tributaria que diera





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

origen a la presente causa se encuentra cancelada con anterioridad a la ley citada tal cual señala explícita y expresamente la norma. Asimismo, Daniel Benítez no se encuentra condenado, resulta ser una persona física y la única imputación vigente en su contra es la de simulación dolosa de pago (según la ley 24.769, a la sazón derogada)."

Por otra parte, en su pedido, solicitó que se apartara a la Agencia Federal de Ingresos Públicos de su rol de querellante en este proceso. Motivó esa postura diciendo que "la acción penal por parte de la AFIP exclusivamente sobre delitos tributarios no puede continuar de forma alguna, menos aún cuando no le restaría perjuicio económico y en tanto no puede perseguir un agravio penal a raíz de lo dispuesto directamente por el Congreso de la Nación y, por tanto, debe ser seguidamente apartada de su rol de querellante en el proceso."

Finalmente, concluyó que "no mucho más puede agregarse atento a la claridad de la ley vigente sobre el asunto, los principios y garantías constitucionales de legalidad e igualdad ante la ley y, más claramente sobre la situación puntual de Daniel Benitez. En cuanto a la naturaleza jurídica, sabido es que este tipo de normas constituye una amnistía, cuyos alcances son amplios y su no acatamiento implica graves violaciones de índole Constitucional, como a las garantías de legalidad e igualdad ante la ley, sin mencionar el irrespeto al orden republicano."

II. De igual modo, la defensa técnica de Galeano presentó un escrito a fs. 8209/12 adhiriéndose al planteo impetrado por el Dr. Sergio Curzi.



Sobre el punto, dijo que "corresponde referir que asiste a esta parte el insoslayable derecho a adherirse al planteo formulado por la defensa de Benítez pues los efectos del planteo de excepción de falta de acción -en orden a la extinción de la acción penal por amnistía- han de extenderse al caso de nuestro asistido. Concretamente, al Sr. Cesar Luis Galeano se le imputa el delito de simulación dolosa de pago previsto por el art. 11 de la derogada ley 24.769, que establecía una pena de entre 2 y 6 años de prisión. Así, queda claro que la imputación formulada a nuestro asistido, y por la que fuera elevado a juicio oral, resulta idéntica a la que se formuló respecto del incidentista Benítez. El hecho de que las imputaciones sean idénticas es otra de las razones por la cuales esta parte tiene derecho a adherir al planteo efectuado por la defensa técnica del Sr. Daniel Benítez."

Asimismo, en cuanto a los requisitos establecidos en la ley 27.743, sostuvo que "Tal como está debidamente comprobado en autos, sin controversia, la obligación tributaria que dio origen a esta causa fue saldada previo a la sanción de la ley mencionada, tal como lo establece de manera clara y explícita la norma que regula la amnistía. Además, es evidente que no obra contra nuestro asistido una condena firme siendo que la única acusación que se le dirige es, en efecto, aquella que fue plasmada en la requisitoria de elevación a juicio."

Por último, concluyó su planteo diciendo que "En definitiva, se encuentran acreditadas en autos las condiciones a las cuales la nueva ley de amnistía condiciona la extinción de la acción penal y, por ello, tomando en cuenta los motivos que fundamentan el derecho de adhesión de esta parte, corresponde dar por reproducidos los fundamentos detalladamente esgrimidos por el incidentista."





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

III. Asimismo, la defensa técnica de **María del Carmen Santellán** y **Daiana Aprilanti** solicitó la extinción de la acción penal a fs. 8211/2 respecto de sus defendidas.

En este sentido, sostuvo que "María del Carmen Santellán ha sido requerida a juicio como coautora penalmente responsable del delito de simulación dolosa de pagos (art. 45 del CP y art. 11 de la ley 24.769) (...) En función de lo previsto en la nueva norma, y considerando que 1) se encuentra cancelada la totalidad de las obligaciones tributarias que dieron origen a la presente pesquisa con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley aludida; 2) no se ha dictado sentencia en estos actuados; 3) el supuesto de mi asistida no encaja en ninguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 4 de la norma; corresponde en el caso que VE extinga la acción penal respecto de María del Carmen Santellán y, en consecuencia, dicte su sobreseimiento".

Ahora bien, con relación a **Diana Aprilanti** propuso que se llegara a idéntica solución que respecto de **Santellán**. Señaló que el régimen legal también favorece con la extinción a aquellos acusador por delitos conexos con la obligación tributaria cancelada. Afirmó que se trata de una interpretación sistemática y se apoyó en el principio "pro homine" citado por la CSJN en el fallo "Acosta".

IV. Posteriormente, la defensa de **Núñez, Cantisano** y **Boschetto** citó el art. 4 de la ley 27.743 y sostuvo que "una interpretación adecuada de la norma permite colegir, sin demasiada dificultad, que están incluidos en la 'amnistía' todas aquellas personas que no se encuentren condenadas -con condena confirmada en segunda instancia- por



delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias."

Finalmente, citó jurisprudencia y dijo que "Párrafo aparte merece la pretensa intención de la Fiscalía de, luego de muchos años de trámite, encuadrar la conducta de todos los imputados en el tipo penal de estafa previsto y reprimido en el art. 172 del Código Penal. En ese sentido, solo quiero manifestar que de hacerse lugar al pedido del titular de la acción pública se estaría violando el principio de congruencia consagrado por Nuestro Máximo Tribunal en los precedentes "Fariña Duarte" -fallos 327:2790- y "Verbeke" -fallos 326:1149-, entre muchos otros. En efecto, la sola circunstancia de que se modifique el sujeto pasivo de la acción, supone un cambio sensible en la base fáctica hasta hoy conocida por los imputados, cambio que no podrá ser superado por la prueba que pueda producirse en el debate."

V. Por último, se pronunció la defensa de **Hebe Leonor Colli**, quien de igual manera solicitó que se extinguiera la acción penal en favor de su defendida.

Sobre el punto, sostuvo que "como consecuencia de la sanción de la ley ut supra mencionada, se ha puesto una amplia amnistía al sostener las acciones penales se extinguen de pleno derecho cuando las obligaciones se encuentren canceladas.

Consta en autos que la AFIP percibió el total de las sumas atento que fueron canceladas en su totalidad las obligaciones tributarias relacionadas con el hecho que nos convoca."

Asimismo, pidió que se aparte a la Agencia Federal de Ingresos Públicos de su rol como parte querellante en este proceso.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

VI. A su turno, se corrió traslado de los planteos a la Agencia Federal de Ingresos Públicos y al Ministerio Público Fiscal.

A) En este sentido, primeramente, se expidió la parte querellante.

En cuanto a la extinción de la acción penal de **Benítez**, sostuvo que "En primer lugar, cabe mencionar que en la presente causa, el Sr. Daniel Benítez se encuentra requerido a juicio oral, por el delito de simulación dolosa de cancelación de obligaciones, previsto en el artículo 10 del Régimen Penal Tributario establecido por el artículo 279 de la Ley 27.430. La pretensión fiscal corresponde a los impuestos IVA y Ganancias por el período fiscal 2011, por un monto que asciende a \$ 13.450.437,25. Conforme surge a fs. 498/520 y la presentación de la División Penal Tributaria del Departamento Legal dependiente de la Subdirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, que obra glosada a fs. 1094/5, la contribuyente Supermercados Mayoristas MAKRO S.A. abonó la totalidad de las obligaciones tributarias canceladas anteriormente mediante la utilización de los créditos fiscales impugnados por el organismo recaudador."

En ese norte, realizó un repaso de la normativa aplicable al caso y concluyó que "Tal como se encuentra acreditado y no controvertido en autos; la obligación tributaria que diera origen a la presente causa, se encuentra cancelada con anterioridad a la ley citada. Con respecto al pedido de extinción de la acción, en virtud de que la pretensión fiscal correspondiente se encuentran canceladas en su totalidad - conforme la información obrante

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

en este Organismo-, esta querella no se opone a tal planteo, siempre se corroboren los extremos exigidos para la concesión de la presente amnistía, en los términos de la ley 27.743."

Por otra parte, con relación a la situación procesal de **Galeano**, la Dra. Olga Drebnica dijo que "Ante todo, cabe aclarar que, en su presentación, la defensa de Galeano adhiere plenamente a lo planteado por la defensa de Benítez, por entender que se da idéntica situación procesal."

Sobre esa base, manifestó que la calificación penal atribuida en autos resultaba la misma, citó el derecho aplicable en el marco de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la ley 27.743 y terminó su presentación sosteniendo que "Tal como se encuentra acreditado y no controvertido en autos; la obligación tributaria que diera origen a la presente causa, se encuentra cancelada con anterioridad a la ley citada. Con respecto al pedido de extinción de la acción, en virtud de que la pretensión fiscal correspondiente se encuentran canceladas en su totalidad - conforme la información obrante en este Organismo-, esta querella no se opone a tal planteo, siempre se corroboren los extremos exigidos para la concesión de la presente amnistía, en los términos de la ley 27.743."

Sin perjuicio de ello, la Agencia Federal de Ingresos Públicos se manifestó en contra de su apartamiento como parte querellante.

De ese modo, arguyó que "La querella es una declaración de voluntad, mediante la cual quien la formula, no solo pone en conocimiento del Juez hechos delictivos, sino que expresa la voluntad de ejercitar la acción penal, constituyéndose en parte en el correspondiente proceso. En este devenir procesal, esta parte cumplió con todos los pasos legales que llevaron hasta la instancia actual.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

Entonces, no resultaría plausible concebir como válido un pedido de apartamiento de querella, toda vez que se cumplió en tiempo y forma con los pasos procesales en esta instancia. A esta parte querellante le asiste, no sólo el derecho sino la obligación, de representar al Estado, máxime en causas donde se ventilan cuestiones que hacen al bien jurídico protegido Hacienda Pública. Vale decir, no se verifica la pérdida de derechos procesales vinculados al hecho investigado."

Con relación a la situación procesal de **Santellán**, dijo que "en virtud de que la pretensión fiscal correspondiente se encuentra cancelada en su totalidad - conforme la información obrante en este Organismo-, esta querella no se opone a tal planteo, siempre que se corroboren los extremos exigidos para la concesión de la presente amnistía, en los términos de la ley 27.743."

No obstante, distinta solución propuso el fisco respecto de **Aprilanti**. En este sentido, argumentó que "no sería aplicable el beneficio de extinción de la acción penal para Aprilanti, en el entendimiento de que se trata de acciones penales completamente independientes, tanto en su análisis dogmático como en su investigación, y no integran el universo de aquellas que contempla el art. 2° de la ley 27.743."

Posteriormente, respecto de la situación procesal de **Hebe Leonor Colli**, sostuvo que "en virtud de que la pretensión fiscal correspondiente se encuentra cancelada en su totalidad - conforme la información obrante en este Organismo-, esta querella no se opone a tal planteo, siempre



se corroboren los extremos exigidos para la concesión de la presente amnistía, en los términos de la ley 27.743.”

Finalmente, con relación a **Boschetto, Nuñez y Cantisano**, manifestó que “Núñez y Cantisano fueron requeridas por la comisión del delito de encubrimiento por receptación dolosa, agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro (art. 277 del C.P.). Y Boschetto fue requerido por el delito de falsedad ideológica de documento público. Estas conductas quedarían incluídas en las exclusiones del art. 4°, inc. 1) de la Ley 27.743(…)”

Asimismo, sostuvo que “sin perjuicio de ello - y con el condicionante del incipiente marco interpretativo de la normativa en cuestión - no debe soslayarse que la ley 27.743 expresamente prevé que el acceso a los beneficios allí contemplados se condicionan, sin duda alguna, a partir de la regularización de las obligaciones tributarias.

En tal sentido, no cabe duda que la primera regla de interpretación de una ley es la de asignar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra de la ley, marco en el que , en principio, resultaría claro que las acciones penales de las que libera el art. 5° de la ley 27.743, son aquellas que nacen de los delitos en cuya configuración se encuentra presente el incumplimiento de “obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos”. Es decir, se libera de las acciones penales que pudieran corresponder por dicho incumplimiento.

Por lo expuesto, esta parte considera que no sería aplicable el beneficio de extinción de la acción penal para Núñez, Cantisano y/o Boschetto, en el entendimiento de que se trata de acciones penales completamente independientes, tanto en su análisis dogmático como en su investigación, y





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

no integran el universo de aquellas que contempla el art. 2° de la ley 27.743."

B) Posteriormente, se pronunció el acusador público, quien se opuso a la procedencia de los planteos defensistas.

Primeramente, respecto de Galeano y Benítez, sostuvo que "(...) Si bien es cierto que la maniobra tuvo como consecuencia la simulación dolosa en el pago de los tributos mencionados, y que en principio dichas conductas fueron calificadas como infracción al art. 11 de la ley 24.769 (reemplazado por el art. 10 de la ley 27.430), no menos cierto es que la conducta también resultó una estafa a la empresa SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A., toda vez que fue quien en definitiva adquirió los saldos de libre disponibilidad cedidos por parte de la supuesta NIDERA S.A. y que presentó a los fines de compensar sus obligaciones impositivas.

Por lo tanto, dicho accionar no puede quedar solamente subsumido en una infracción Tributaria, sino que además se ha provocado a través del ardid desplegado por los intervinientes en las distintas etapas, el desplazamiento patrimonial de MAKRO S.A. hacia quienes en definitiva se beneficiaron con la cesión fraudulenta.

Tengamos en cuenta que la firma MAKRO, cuyos directivos fueron en principio vinculados, resultó víctima del hecho."

Asimismo, quiso poner de manifiesto que "quienes hoy pretenden constituirse como beneficiarios del pago, no fueron quienes lo realizaron y muy por el contrario, provocaron las maniobras defraudatorias que, por cierto



perjudicaron en un principio a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, pero también a la empresa MAKRO S.A. al poner en práctica todo el obrar ardidoso que llevaron a cabo Benitez, Galeano y el resto de los imputados."

A modo de conclusión, dijo que "En consecuencia, no puede la conducta llevada a cabo por los imputados BENITEZ, GALEANO y otros de los partícipes en la maniobra, quedar subsumida exclusivamente en el delito de simulación dolosa de cancelación de obligaciones, pues además existe un perjuicio concreto hacia quien resultara adquirente de los créditos fraudulentamente cedidos."

Por otra parte, adunó que "más allá de la calificación legal expuesta en el requerimiento de elevación a Juicio suscripto por el Fiscal Iuspa, entiendo que la misma no resulta vinculante en esta instancia y que puede ser ampliada a partir de la valoración de los hechos que resulten del Juicio oral a llevarse a cabo. Esto, no implica a mi juicio modificar la base fáctica expuesta en la citada requisitoria, toda vez que conforme la descripción de los hechos, se encuentran abarcadas la totalidad de las maniobras llevadas a cabo desde un principio y hasta el logro del resultado patrimonial obtenido que, incluso, llevó a procesar a quienes resultaron receptores de los cheques utilizados para cancelar las fraudulentas cesiones de crédito."

Por último, sostuvo que "En resumen, pretender aplicar la norma establecida por el título I de la ley 24743 a las conductas aquí imputadas, resulta a todas luces improcedente toda vez que, como ya se afirmó, las mismas exceden el mero incumplimiento al régimen Tributario y encuadran en las conductas previstas por el art. 172 del Código Penal que habría cometido los imputados que no se encuentran amparadas por la suerte de "amnistía" que emana de la citada norma."





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

En mismo sentido se pronunció respecto de los casos de **Aprilanti** y **Santellán**. Así, dijo que "a los fines de expedirme respecto del planteo efectuado, habré de remitirme en un todo a lo expresado en mi anterior intervención de fecha 7 de agosto del corriente ya que se trata de un petición análoga a aquellos, por lo que corresponde rechazar el planteo efectuado."

Con relación a los acusados **Horacio Emilio Boschetto**, **Wanda Georgina Cantisano**, **Miryam Graciela Núñez** y **Hebe Leonor Colli** dijo que "En virtud de la similitud en cuanto al contenido de las peticiones efectuadas en los escritos en traslado, entiendo que corresponde adoptar idéntico criterio que el que fuera sostenido respecto de **BENITEZ**, **GALEANO**, **MARÍA DEL CARMEN SANTELLÁN** Y **DIANA MIRIAM APRILANTI**.

En efecto, más allá que los asistidos del sr. Defensor Oficial, se encuentran elevados a juicio por el delito de encubrimiento, este hecho estaría relacionado con la estafa llevada a cabo por los imputados por lo tanto debe aplicarse el mismo criterio que el sostenido en mis anteriores intervenciones.

En cuanto a la simulación dolosa, entiendo que no corresponde la extinción de la acción a su respecto por entender que ello ha implicado además una conducta de estafa en contra de la firma **SUPERMERCADOS MAKRO S.A.**"

VII. De ese modo, en el marco del contradictorio, se corrió traslado del dictamen fiscal a las defensas técnicas de los imputados.

A) Al momento de contestar el traslado, la defensa de **Benítez** manifestó que "la querella (AFIP) razonablemente



no se opuso a la extinción de la acción penal declara por el Congreso de pleno derecho. Que por el contrario, el Sr. Fiscal apartándose de la ley y de una derivación razonada del derecho y constancias de la causa -en forma írrita-, se opuso, respecto de lo cual se corrió la vista que viene a contestarse."

En línea con lo anterior, argumentó que "todo aquello, así como la discusión sobre el fondo que pretende ahora el Sr. Fiscal, en clara disidencia con su predecesor que ejerció la acción, traer a juicio, no tiene relevancia alguna en esta vía procesal, pues "la acción legal" ha fenecido.- Las cuestiones que ha decidido traer el Fiscal como una suerte de anticipación del juicio (debate), no sólo son ajenas a este planteo, sino que son precisamente las cosas que ya no pueden ventilarse pues la acción penal se encuentra ya extinta de "pleno derecho" en pos de la paz social y la igualdad ante la ley."

Asimismo, sostuvo que, al momento describir el hecho que le imputaba a Benítez, el fiscal había omitido incorporar piezas relevantes para su análisis, pretendiendo mutar el ejercicio de la acción penal propiamente dicha.

Remarcó: "Me permito preguntarme ¿el Sr. Benitez (que no se hubo beneficiado ni con el crédito, ni con los cheques o el dinero), ha estado defendiéndose ante la competencia penal 4 económica, durante más de una década, de un delito que, ahora, no es tal?

Afirmar una imputación por simulación dolosa de pago y, luego, afirmar que quienes debían hacer valer esos créditos, es decir los individuos -dependientes o no- que impulsaron el pago por y en favor de Makro S.A., resulta un contrasentido hipotético fáctico irreconciliable a la luz del requerimiento de elevación a juicio y de la clara postura decidida por el Fiscal instructor y en la que, el





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

mayor éxito de la maniobra, hubiera radicado en que la AFIP no advirtiera la misma.

De otro lado, como es razonable y sólo como un ejemplo, tampoco se hubo enderezado la investigación instructoria a determinar los alcances e idoneidad de un posible ardid -que no así se describe, ni se individualiza a quién- para simplemente desapoderar a la persona jurídica, como tampoco de la relevancia entonces de las presentaciones en el sistema de AFIP en favor de ésta supuestamente con el usuario habilitado a nombre de Benitez, o de las registraciones internas contables aseguradas, o bien, a las órdenes dadas a sus dependientes, etc.

Y ello pues el delito de simulación dolosa de pago, único descripto e imputado por el Ministerio Público a Benitez, no lo requería ni era relevante para el avance de la instrucción.-

Va de suyo entonces, que la calificación jurídica no resulta un decisión caprichosa, sino que es el devenir de todo un proceso previo hasta el presente, de una descripción fáctica, su investigación, la producción de su prueba e incluso de la actividad de las defensas y demás partes hasta el presente, por lo que su cambio al sólo efecto de evitar una excepción, conllevaría irremediablemente a la incoherencia y nulidad de todo el proceso.

Es decir, la calificación es el resultado de ese proceso conformado hasta aquí y, por tanto, a la luz del mismo debe ser evaluada cualquier excepción perentoria. Dicho de otra forma, no aparece como procesalmente coherente hacer variar instancias precluidas u omitir piezas



relevantes, sólo para justificar indebidamente la continuación de una acción fenecida."

Consideró que el Fiscal realizó un análisis parcializado omitiendo piezas relevantes, apartándose de las circunstancias comprobadas de autos, considerando su dictamen arbitrario y nulo.

De igual modo, indicó que el dictamen debía recaer en esa misma solución legal porque no había sido producto de la derivación razonada del derecho vigente.

Primeramente, sentó su postura diciendo que "no se presenta como derivación procesal lógica sostener la vigencia de una acción, por lo que podría ocurrir si la misma continuara en el análisis de su fondo de continuarse esa misma acción (debate). A entender de esta defensa el Sr. Fiscal ha tomado una posición hipotético jurídica que en esta instancia se encuentra precluida y, a la vez, pretende fundarse en etapas del proceso futuras que ya no se encuentran habilitadas y sobre las que no puede abrirse una discusión futuroológica.

Dicho de otra forma, el dictamen cuestionado carece de la incorporación del principio de preclusión de las etapas procesales y, a la vez, omite analizar la naturaleza jurídica de la Amnistía y sus alcances que evitan la acción futura."

A modo de apoyo, citó jurisprudencia que, a su entender, resultaba aplicable al caso y mencionó que "de lo contrario sería imposible aplicar una solución procesal antes de terminar cualquier juicio, más aún como lo es una Amnistía de orden amplio y general.

Por dar un ejemplo, otros delitos tributarios más graves incluidos en la Amnistía -como la evasión agravada- requieren necesariamente o están compuestos de otros posibles hechos delictivos que concurren, o podrían admitir variadas calificaciones, 8 infracciones, etc.. Por ejemplo,





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

respecto de falsos documentos como facturas, cheques, recibos de sueldo, tickets, créditos Fiscales, balances falsos, certificaciones o una cuenta fraguada, con las correspondientes afectaciones a distintos bienes jurídicos que podrían siempre evaluarse desde distintas perspectivas jurídicas.

Dicho de otra forma, todas las cuestiones que pudieren sucederse en los debates, indefectiblemente quedan fenecidas por una cuestión procesal de acuerdo a la naturaleza jurídica propia de los planteos procesales y de acuerdo a la instancia procesal en que se encuentran, y más aún ante la amplitud de una Amnistía.

Como es sabido, la amnistía es el olvido de un hecho delictuoso para establecer la calma y la concordia social y ello debe además compatibilizar con la garantía de igualdad ante la ley para todos los responsables."

Concluyó este segmento de su presentación sosteniendo que "entiende la defensa que queda demarcado que el Dictamen Fiscal tampoco resulta derivación razonada del derecho o la ley aplicable y por tanto, resulta un acto jurídico equivocado, pero también inválido."

Ahora bien, agregó que "Si a todo ello le sumamos el principio de legalidad estricto y el principio "pro homine" receptado por Nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales, es que cualquier solución que habilite la acción con miras a una evaluación en juicio como pretende la Fiscalía quedaría irremediablemente por fuera y en contra de la ley."

En consecuencia, dijo que "A partir de lo expuesto, entiende respetuosamente la defensa que no debe perderse de



vista que la incidencia que se trae a conocimiento del Tribunal detenta el efecto natural precisamente de evitar el sometimiento a proceso ('acción penal') con independencia de su resultado ante un juicio de fondo por la sencilla razón que el Congreso de la Nación así lo ha dispuesto 'de pleno derecho' y por lo que, lo propuesto por la Fiscalía, supondría incluso el ejercicio de un acto coercitivo cuya jurisdicción ya no está en manos de los jueces de todo el país y se les encuentra incluso penalmente vedado por el Código Penal (art. 269 del Código Penal)"; y citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Finalmente, cerró su presentación y resumió su petición en base a que "el dictamen Fiscal, en este caso particular, además de apartarse de las querellas, se aparta de las circunstancias comprobadas del sumario y no resulta derivación razonada del derecho vigente, violentando directamente garantías de debido proceso, derecho de defensa y pro homine, a la vez que va directamente en contra de una ley del Congreso de la Nación y por lo cual, se erige como arbitrario y, por tanto, írrito como acto jurídico en el sentido que la CSJN da al término."

B) Por otra parte, la defensa de **César Luis Galeano** dijo que "respecto del argumento ensayado por el señor Fiscal sobre la existencia del delito de estafa, se incurre aquí en un error procesal y en otro material del que se hablará más adelante. En lo que concierne a lo primero, el requerimiento de elevación a juicio agregado a esta causa no incluyó ni siquiera tangencialmente la imputación del delito de estafa (art. 172 del C.P.), por lo cual la novedosa pretensión del Sr. Fiscal de incorporar a la causa una hipótesis en ese sentido resulta manifiestamente improcedente y contraria a derecho. No se trata, tan sólo, de que no se haya hecho la calificación jurídica del art. 172 al "mismo hecho" atribuido en la intimación, sino que el





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

delito de estafa presupone ya una estructura fáctica propia, que no fue objeto de imputación hasta ahora."

Sobre esa base, concluyó que la pretensión del fiscal resultaba improcedente, por ser sorpresiva para la defensa y, además, nula, toda vez que se estaría violando el principio de congruencia.

En relación con lo anterior, sostuvo que "La incorporación de esta nueva calificación es un mero intento de mantener viva la acción penal por un delito de naturaleza ordinaria, esto es contrario a la jurisprudencia que tiene dicho y definido que la invocación de una calificación jurídica más gravosa a los efectos de evaluar por ejemplo en el caso de la prescripción "...no podrá ser tenida en cuenta a los fines de la prescripción de la acción penal en los siguientes casos: a) cuando recién fuera esgrimida en el incidente de prescripción al sólo fin de evitarla..." [ver CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, Sala VI, c. 18765/13, rta. el 10/12/21 y sus citas], argumentación que, mutatis mutandis, vale por igual para cualquier otra causal de extinción de la acción penal".

Por otra parte, argumentó que "lo que también omite considerar el señor fiscal es que la propia ley –artículo 41, primer párrafo– , establece como que al momento de entrada de la ley, deberían verificarse los requisitos positivos y negativos exigidos por la ley y para el supuesto de los delitos de defraudación –que aquí el fiscal pretende exponerlo como un limitante a la viabilidad de la extinción de la acción penal– y lo cierto es que en ese momento temporal, tal como venimos expresando: NO EXISTE y NUNCA existió ninguna imputación por defraudación."

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

A su vez, respecto de los dichos del fiscal por la forma en la que se instrumentó el pago de las obligaciones tributarias, dijo que "en la ley penal tributaria en los casos donde hay más de un imputado en la causa penal, el pago hecho por uno de ellos favorece a los restantes, quienes podrán también solicitar la extinción de la acción instada contra ellos en función del pago hecho por otro.

Esa solución se presenta como lógica y justa porque el Fisco se estaría enriqueciendo sin causa si se pretendiera cobrar el mismo concepto a cada imputado para otorgarle el beneficio cuyo requisito ya está cumplido. [Cfr. ROBIGLIO, Carolina L. I., "LA AUTORÍA EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS", Ed. Ad Hoc, Primera Edición, Buenos Aires, 2004, pág. 344.];

Si se siguiera la lógica del Sr. Fiscal para que los imputados puedan beneficiarse del pago al Fisco, tendrían que aportar todo el mismo monto sin importar la cantidad de imputados o el monto real adeudado. Esto ya fue argumentado en el planteo de extinción de la acción penal y el Sr. Fiscal no ofreció respuesta alguna."

Concluyó su presentación diciendo que "lo cierto es que, en el orden de lógico de los argumentos, es prioritaria la circunstancia de que por un hecho propio del delito de estafa ordinario el imputado nunca fue intimado y, por consiguiente, no puede "escurrirse" una imputación por estafa en la etapa de debate oral -a días de iniciar el juicio-, pues esto violaría el principio de congruencia. El argumento "material" arriba esbozado sería prioritario, sólo si, primero, realmente se hubiera intimado acumulativamente por ilícitos fiscales y, a la vez, por un hecho propio de estafa, del derecho común. Mas esto nunca ocurrió".

C) En esa misma línea, se pronunció la defensa de **Diana Aprilanti**. Comenzó su presentación diciendo que "entiendo que la querella yerra en subsumir el caso en dicho





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

inciso, por cuanto allí se abordan las conductas llevadas a cabo por personas físicas en representación de personas jurídicas. De allí que, expresamente, hace mención a sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas; ninguno de los cuales resulta ser un carácter que revista mi asistida. Por ello, a criterio de esta parte, y tal como ha sido puesto de resalto en la presentación que dio origen a este incidente, la situación de Aprilanti encuadra en el inciso k) de la norma; la cual excluye a 'Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen'.

De allí que, al no haberse dictado sentencia en estos actuados, no hay obstáculo legal para que proceda la extinción de la acción penal respecto de Aprilanti".

Asimismo, sostuvo que "resulta errónea la argumentación fiscalista por cuanto, cuando se amplía el requerimiento, ello puede deberse únicamente al anoticiamiento de un nuevo hecho a las resultas del debate; no de una plataforma fáctica ya conocida y meramente porque se discrepa con la actuación del fiscal de la instancia anterior. Ello, además de conculcar garantías constitucionales del imputado, confronta con el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal. Pero además, lo cierto es que en estos actuados el representante legal de la empresa presuntamente damnificada ha informado, a fs. 1368, que se había efectuado la denuncia penal en el

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

fuero ordinario, por posible estafa. Esas actuaciones han sido acumuladas a la presente; no obstante lo cual, no ha sido materia de imputación al momento de presentar el requerimiento de elevación a juicio en los términos del art. 346 del CPPN."

Por último, dijo que había quedado demostrado que la solución propuesta se ajustaba a las normas por él invocadas.

D) Por otro lado, la defensa de Hebe Leonor Colli dijo que *"como consecuencia de la sanción de la ley ut supra mencionada, se ha puesto una amplia amnistía al sostener las acciones penales se extinguen de pleno derecho cuando las obligaciones se encuentren canceladas, el desistimiento de su rol de querellante de Supermercados Macko S.A. y el expreso silencio a la notificación de V.E permiten concluir que la solicitud de las defensas en estos actuados debe tener acogida favorable."*

Asimismo, solicitó que se aparte a la Agencia Federal de Ingresos Públicos del proceso.

E) Así las cosas, el defensor oficial Alejandro Arguilea, mantuvo su postura en cuanto a la procedencia de la extinción para los casos de Núñez, Cantisano y Boschetto.

Separó su presentación en dos apartados, dedicando el primero a los argumentos esgrimidos por la querella. De ese modo, dijo que *"La simple lectura del escrito rubricado por la letrada mencionada en el título, permite colegir que en dicha presentación se ha llevado a cabo una errónea invocación de la normativa aplicable al caso. También se desprende de la mera compulsa de su contenido que la solución que propugna la representante de la querella no resulta congruente con los fundamentos desarrollados."*

Sostuvo que *"En efecto, si tenemos en consideración que se encuentran excluidos de la amnistía solo aquellas personas sobre los que pesa una condena, confirmada en*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

segunda instancia, por delitos comunes conexos con el incumplimiento tributario principal, podemos concluir, por lógica, que quienes no se encuentren en ese escenario, quedan incluidos en la norma mencionada en el párrafo que antecede."

Por otro lado, trató la pretensión del Ministerio Público Fiscal y adunó que "En lo que atañe a la posición esgrimida por la Fiscalía en su presentación, hago míos los argumentos volcados por mis colegas defensores, en particular aquellos que esgrimiera el Dr. Sergio Curzi en la presentación que efectuara en favor de su defendido Daniel Benítez. También me remito, en el punto, a lo que expresara en mi anterior escrito."

Continuó su argumentación diciendo que "Sres. Jueces. Más allá de esta suerte de futurología que esconde la posición del Fiscal General y de la absoluta desnaturalización de los mecanismos previstos en el art. 381 del C.P.P.N que subyacen en su idea, lo cierto es que no existe ninguna posibilidad de que aparezca un elemento que varíe el actual escenario. La situación en la misma desde la génesis del expediente y, mucho más, desde que Makro, el supuesto damnificado, se apartó del rol de querellante (...)

En ese camino, entiendo que ante un escenario que no ha variado desde muchos años a esta parte, si el Fiscal hubiera considerado como configurada la estafa en perjuicio de Makro, nada hubiere obstado a que los imputados fueran intimados en orden al delito de mención y que la Fiscalía efectuará el requerimiento en ese sentido. Nada justifica que para llevar a cabo ese trabajo deba realizarse un juicio oral. Es inconveniente e inoportuno".

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

F) Finalmente, se le corrió vista a la defensa de María del Carmen Santellán y, vencido el plazo otorgado, no realizó ninguna presentación al respecto.

VIII. Que a fs. 8221 se dispuso notificar a la empresa "Supermercados Hipermayorista Makro S.A." de las solicitudes impetradas por las defensas de los imputados. No obstante, nada manifestó al respecto dicha sociedad.

Y CONSIDERANDO:

El juez Matías Alejandro Mancini dijo:

I. De las situaciones procesales de Héctor Daniel Benítez, César Luis Galeano, María del Carmen Santellán y Hebe Leonor Colli.

Llegado el momento de resolver respecto de las peticiones impetradas por las defensas de **Héctor Daniel Benítez, César Luis Galeano, María del Carmen Santellán y Hebe Leonor Colli** habré de hacer lugar a la extinción de la acción penal, conforme lo establecido en el artículo 5 de la ley 27.743, por los argumentos que expondré a continuación.

En primer lugar, cabe rememorar que el fiscal que intervino en la etapa preparatoria les atribuyó a los nombrados "haber simulado, mediante registraciones de formularios falsos y generando así un saldo de libre disponibilidad ficticio, el pago de obligaciones tributarias que tenía a su cargo la contribuyente Supermercados Mayoristas Makro S.A."

Asimismo, que en oportunidad de requerir la elevación a juicio, el acusador público entendió que su conducta se encuadraba en el delito de simulación dolosa de pagos, en calidad de coautores (art. 45 del CP y art. 11 de la ley 24.769).

Por otra parte, que el 8 de julio del año en curso entró en vigencia la ley 27.743. Así, en su Título I dispone los requisitos que se deben reunir para el acogimiento al





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

Régimen de Regulación Excepcional de Obligaciones
Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.

De ese modo, el artículo 3 establece que "Quedan
incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior:

a) Aquellas obligaciones que se encuentren en curso
de discusión administrativa (incluye las causas ante el
Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa
(incluye cualquier causa en trámite ante el Poder Judicial),
en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según
corresponda, incondicionalmente por las obligaciones
regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso
el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos
causídicos. El allanamiento y/o el desistimiento, según
corresponda, podrá ser total o parcial. En ningún caso,
dicho allanamiento y/o desistimiento podrá ser interpretado
como un reconocimiento de la exigibilidad de la obligación
fiscal con relación a los períodos fiscales que no se hayan
regularizado a través del presente régimen;

b) Aquellas obligaciones respecto de las cuales
hubieran prescripto las facultades de la Administración
Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigir las,
y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal
tributaria o, en su caso, penal económica, contra los
contribuyentes o responsables;

c) Aquellas obligaciones que nacieron en el marco
de la ley 27.605; d) Aquellas obligaciones de los agentes de
retención y percepción que hubieran omitido retener o
percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o
percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo
para hacerlo;

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

e) Las obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, incluidos los planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado o no la correspondiente caducidad a dicha fecha;

f) Toda obligación fiscal que no se encuentre expresamente excluida en el artículo 4° de la presente ley;

g) Las multas por infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, que no se determinen en función de los tributos a la importación o a la exportación, excepto la infracción de contrabando menor".

En esa misma línea, el artículo 4 dice que "Quedan excluidos de lo dispuesto por el presente régimen:

a) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales;

b) Las deudas por cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART);

c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y/o el personal de casas particulares;

d) Las cotizaciones correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS);

e) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio;

f) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE);

g) Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia de infracciones al artículo 488, Régimen de Equipaje del Código Aduanero, ley 22.415 y sus modificaciones;

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

h) Los intereses -resarcitorios y/o punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes;

i) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;

j) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen

k) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

l) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados -con condena confirmada en segunda instancia- con fundamento en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

m) Los agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el artículo 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, y/o en los artículos 6° y 9° de la ley 24.769 y sus modificatorias y/o en los artículos 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones”.

Por otro lado, en lo que aquí interesa, el artículo 5 de esa misma ley establece lo siguiente: “(...) También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha. Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen.”

En este sentido, resulta relevante lo dispuesto en su Título II, art. 34, toda vez que estipula que “Quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren en el presente régimen, en las rentas que éstos hubieran generado y en los fondos que se hubieran usado para su adquisición, así como el cobro y la liquidación de las divisas provenientes de la Regularización de Activos de dichos bienes, créditos y tenencias. Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes, directores, síndicos y miembros





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

de los consejos de vigilancia de las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades 19.550 (texto ordenado en 1984 y sus modificaciones), y cargos equivalentes en cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión, representantes legales de sucursales de empresas extranjeras y profesionales certificantes de los balances respectivos.

La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal."

Con relación a ello, se sostuvo que la amnistía "es un acto de gobierno y de soberanía que forma parte del sistema constitucional (...) en razón de constituir el ejercicio de una potestad por la cual el Estado renuncia circunstancialmente a la represión de determinados delitos, disponiendo la extinción de la acción penal y haciendo cesar la condena y sus efectos (...)" (CSJN, fallos 306:911 y 309:5).

Dicho de otro modo, la amnistía se configura como el "olvido de un hecho delictuoso para establecer la calma y la concordia social" y "extingue la acción y la pena si antes hubiese sido impuesta y borra la criminalidad del hecho" (Fallo 178:377, entre otros).

Así las cosas, de la lectura del recopilado legal efectuado, se desprende que, sin lugar a duda, **Benítez, Galeano, Colli y Santellán** se encuentran acogidos por los beneficios previstos en el artículo quinto de la norma.

En ese norte, para que proceda la extinción -en cuanto a lo que aplicaría al caso en trato-, deben



presentarse los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación fiscal que no se encuentre expresamente excluida en el artículo 4° de la ley; b) que las personas que pretenden hacer valer el beneficio de la amnistía no se encuentren condenadas -con condena confirmada en segunda instancia- por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del régimen de regulación de activos; y c) haberse acogido a lo dispuesto dentro del régimen o bien, como sucede en este caso, que las obligaciones tributarias cuyo incumplimiento dio origen a la acción penal hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, en la medida que no haya recaído sentencia confirmada a dicha fecha.

De ese modo, notaremos que la naturaleza jurídica de la obligación tributaria cuya simulación de pago le fue imputada a los nombrados no se encuentra dentro de aquellos tributos que están excluidos del régimen de regulación de activos en el artículo 4°. Tampoco se verifica en el caso la exclusión por condena confirmada en segunda instancia que prevé el inciso "j" de ese mismo artículo.

Por último, la ley determina que se extinguirá la acción penal en aquellos casos donde la cancelación de la obligación tributaria haya operado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley; circunstancia que, conforme lo informó la Agencia Federal de Ingresos Públicos, se encuentra acreditada en autos.

Y más allá que el tipo penal en trato es el previsto en el art 11 de la derogada ley 24.769, debo decir que la actual redacción del artículo 10 de la ley 27.430 lo acoge al tipificar la "simulación de cancelación de obligaciones", siendo el pago uno de los modos de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, se ha dicho que "(...) de reprimir la simulación dolosa de 'pago' (en los términos del art. 11 de la derogada ley 24.769), con el nuevo régimen pasó a acuñar una conducta que incluye a la anterior, pero se proyecta explícitamente mucho más allá: la simulación dolosa de 'cancelación de obligaciones' (art. 10 del art. 279 de la ley 27.430), respecto de la cual la apariencia de pago es tan solo una de sus posibilidades." (Mariano Hernán Borinsky, Pablo Nicolás Turano, Magdalena Rodríguez y Daniel Schurjin Almenar, "Delitos Tributarios y Contra la Seguridad Social", pág. 357, p. 1°).

Ahora bien, lo que se encuentra controvertido por el Ministerio Público Fiscal es que **Benítez, Santellán, Colli y Galeano** se vean beneficiados por un pago que ellos no realizaron.

En contraposición con ello, debo decir que no surge de la lectura de la ley que la cancelación de la obligación tenga que haberse producido por parte de quien pretende valerse de los beneficios previstos en el régimen. Establecer eso como requisito, sería alterar las disposiciones de una ley del Congreso de la Nación Argentina, en perjuicio de los imputados. Incluso, le asiste razón a la defensa de Galeano en cuanto a que, en el marco de un procedimiento tributario, resulte o no en una causa penal, la realización del pago por uno beneficia, necesariamente, a los demás, más allá del derecho de repetición que pueda existir entre los obligados.

Con respecto a esto, recordemos que el concepto "obligación tributaria" proviene de la prestación tributaria que vincula al Estado con el deudor. Entonces, justamente, por la naturaleza del objeto de la obligación es que, a



través del pago, queda disuelto el vínculo jurídico entre estos dos sujetos. Por ende, hecho el pago que extingue la obligación, no se podría pretender que la deuda persista y le sea exigible a los demás, toda vez que ello significaría un enriquecimiento sin causa por parte del fisco.

Siguiendo el mismo razonamiento, cabe recordar que al momento de que se formulara la denuncia de fs. 1/10 la contribuyente "Supermercados Hipermayorista Makro" fue consignada como deudora por la Agencia Federal de Ingresos Públicos y, posteriormente, canceló aquellas obligaciones que le fueron imputadas a partir de las maniobras desplegadas, supuestamente, por los acusados.

Entonces, entiendo que la contribuyente que, en principio, se vio involucrada en una maniobra que parecía desconocer, se encontraba legitimada para realizar el pago. Y más allá de eso, no surge de la lectura de la ley 27.743 que quien pretenda hacer valer el beneficio otorgado por el artículo quinto, párrafo 3°, de ese cuerpo normativo, deba tener identidad con quien canceló la obligación tributaria que fue materia de persecución penal. Dice la norma: "También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha."

Otro de los argumentos esbozados por la acusación pública fue que la maniobra no podía ser encuadrada, solamente, en una infracción a ley penal tributaria sino que, por el contrario, surgía de los hechos una posible imputación por el delito de estafa.

En vista a lo anterior, cabe señalar que, hacer lugar a tal pretensión implicaría una imputación sorpresiva a la defensa toda vez que a lo largo de la investigación jamás tuvo que defenderse de un ardid contra la empresa Makro.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

Tampoco pudo ofrecer o producir prueba en base a esa acusación, la cual es, a todas luces, desde lo normativo y desde lo fáctico, sustancialmente disímil a la simulación dolosa de pagos que le fuera imputada a los encausados.

Nótese que las conductas atribuidas a **Benítez, Santellán, Colli y Galeano** en las indagatorias, en sus procesamientos y en el requerimiento de elevación a juicio, siempre apuntaron al haber simulado el pago de las obligaciones tributarias mediante la generación de un saldo de libre disponibilidad ficticio que se utilizó para compensar el pago de tributos. Esta postura se robustece con la acumulación a la presente causa del expediente 6118/2012, cuyo trámite inició ante la justicia ordinaria, en el cual la empresa Makro presentó una denuncia por estafa contra el aquí imputado **Benítez**.

Es decir, con esa información, los investigadores, al momento realizar las indagatorias de fs. 4512, respecto de **Benítez**, fs. 4734, con relación a **Galeano**, fs. 6419, respecto de **Colli** y de fs. 5360, respecto de **Santellán**, ya habían descartado la hipótesis delictiva de una defraudación.

Sumado a ello, debo decir que tampoco le fue imputado a los acusados una acción mancomunada, con división de roles para estafar a Makro. No se ha hecho durante la investigación, como así tampoco lo hizo el fiscal al momento de presentar su dictamen en donde pretendió encuadrar la maniobra en un plan común defraudatorio. Entonces, no queda otra solución que apartarse del cambio de calificación propuesto por el fiscal por resultar evidentemente sorpresivo conforme el desarrollo de la causa a lo largo de su trámite.

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

Incluso, la postura de la fiscalía no encuentra apoyo en la conducta asumida por la supuesta víctima del delito de estafa que, habiendo sido notificada de las solicitudes de extinción en los términos de la ley 27.743, no se opuso a su procedencia.

De acuerdo con lo expuesto, la conducta que la acusación pretende que se atribuya a los nombrados significaría una violación al principio de congruencia.

Debe recordarse que, sobre el principio de congruencia, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que *"el principio de congruencia exige que el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva"* (confr. Fallos 315:2969; 319:2959, votos de los jueces Petracchi y Bossert; 321:469; 324:2133, voto del juez Petracchi).

Asimismo, tiene dicho la Cámara Federal de Casación Penal que *"el principio de congruencia, como expresión de la garantía de defensa en juicio (art. 18 C.N.), requiere que la sentencia se expida sobre el hecho y las circunstancias que contiene la acusación, es decir, sobre aquellos elementos intimados al acusado y acerca de los cuales ha tenido oportunidad de ser oído. Se "pretende que el fallo no aprecie un hecho distinto al acusado, ni valore circunstancias no introducidas por la acusación"* (confr. J. Maier, *Derecho Procesal Penal, T. I. Fundamentos*, Editores del Puerto, 2ª edición, 2ª reimpresión, Bs. As., 2002, p. 569 y sigs.)." (cfme. Fallo de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, causa n° FCR 485/2018/TO1/CFC1).

De allí se deriva que *"el sustrato fáctico"* deba ser el mismo por el cual las partes desplegaron su actividad defensiva, razón por la cual la imputación por defraudación a Makro iría contra la interpretación del Máximo Tribunal y





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

afectaría el derecho de defensa de **Benítez, Santellán, Colli y Galeano**.

Finalmente, y en otro orden de ideas, es pertinente mencionar que no es este el espacio para analizar la oportunidad, mérito y conveniencia de la ley 27.743 y cierto es que, siendo la voluntad del cuerpo legislativo, corresponde aplicarla.

De hecho, es preciso aclarar que el dictado de amnistías constituye una facultad del Poder Legislativo Nacional, conforme lo establecido en el art. 75, inc. 20, de la Constitución Nacional. En efecto, se erige como el "(...) *único poder que tiene la potestad de declarar la criminalidad de los actos, de crear sanciones y de borrar sus efectos*" (CSJN, fallo 308:1928).

Desde esta perspectiva, tiene dicho la CSJN que "*ignorar dicha redacción implicaría extender la franquicia más allá de la letra de la ley y sustituir al legislador en su tarea, aspecto vedado a los tribunales (Fallos: 273:418), quienes no pueden juzgar el mero acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades propias, debiendo limitarse a su aplicación tal como estos las concibieron (Fallos: 277:25; 300:700)*" (CSJ 001220/2020/RH001Fallos: 347:379 PILAGA S.A. c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/SUMARIO).

En síntesis, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos previstos en la ley 27.743 para que proceda el beneficio de la extinción penal en los términos allí establecidos, corresponde su aplicación respecto de **Héctor Daniel Benítez, María del Carmen Santellán, César Luis Galeano y Hebe Leonor Colli** de conformidad con establecido en

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

los artículos 3, 4 y 5 de la mentada ley y artículos 59, inciso 2°, del Código Penal de la Nación y 336, inciso 1°, del Código Procesal Penal de la Nación.

Asimismo, corresponde levantar todas las medidas cautelares que pesen sobre los nombrados.

II. De las situaciones procesales de Horacio Emilio Boschetto, Miriam Graciela Núñez, Wanda Georgina Cantisano y Diana Miriam Aprilanti.

Ahora bien, distinto resulta el temperamento que he de adoptar respecto de **Boschetto, Núñez, Cantisano y Aprilanti.**

Cabe rememorar que se le atribuye a **Boschetto** "haber insertado declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, en tanto que ha certificado -en su calidad de escribano titular del Registro Notarial nro. 1398 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- como auténticas y puestas en su presencia, las firmas falsas atribuidas a Alejandro Benvenuto, insertas en los siguientes tres instrumentos de 'Oferta de Cesión de Créditos'"

Asimismo, se acusó a **Diana Aprilanti** de "Haber recibido y/o adquirido (tal vez de manos de Carlos Horacio Wall), en fechas inciertas pero muy próximas a los días 24 de agosto, 23 de septiembre, 3 de noviembre y 1ro. de diciembre, todos del año 2017, y con ánimo de lucro, los cartulares del Banco Santander Río nros. 98731764, 98732527, 98733493 y 98734227 (los dos primeros depositados en la cuenta de Compañía de Recaudaciones S.A. y los dos últimos depositados en la cuenta de Beilán S.A., por Núñez y Cantisano, que son empleados de Arcioni(...)) de la cuenta corriente N° 423-00006876 perteneciente a la firma 'Supermercados Mayoristas Makro S.A.', por las sumas de \$ 2.317.146 (pesos dos millones trescientos diecisiete mil ciento cuarenta y seis); \$ 7.734.604,80 (pesos siete millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos cuatro





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

pesos, con ochenta centavos); \$1.334.532,77 (pesos un millón trescientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y dos con setenta y siete centavos) y \$669.237,18 (pesos seiscientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y siete, con dieciocho centavos), respectivamente, todo ello con pleno conocimiento de que provenían de un ilícito anterior, la simulación dolosa de pago descrita al principio de éste acápite, y de que las firmas atribuidas a Alejandro Benvenuto insertas al dorso de los cartulares, son falsas.

Además, se le imputa haber participado necesariamente en la falsificación de las tres cesiones de créditos y derechos de los cheques N° 98732527, 98733493 y 98734227, a partir de las cuales los cartulares de mención fueron cedidos a favor de 'Compañía de Recaudaciones S.A.' y 'Beilán S.A.' merced a la falsificación de las firmas atribuidas a Alejandro Benvenuto, certificadas como auténticas y puestas ante escribano público. Pues el análisis de la prueba reunida en el sumario permite sostener que la nombrada proporcionó al autor de las falsificaciones aquella información necesaria para que las certificaciones falaces se lleven a cabo."

También, el fiscal que intervino en la etapa preparatoria entendió que **Wanda Georgina Cantisano** recibió "de Hernán Arcioni, en fecha incierta pero próximas al 3 de noviembre y 1° de diciembre, ambos de 2011, con ánimo de lucro, los cheques librados por la sociedad 'Supermercados Mayoristas Makro S.A.', a favor de la firma 'Nidera S.A.', del Banco Santander Río (Cta. Cte. 423-000008/6) nros. 98733493 y 98734227, librados los días 3 de noviembre y 1ro. De diciembre del año 2011 'cruzados y no a la orden', por

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

las sumas de \$ 1.334.532,77 (pesos un millón trescientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y dos, con setenta y siete centavos) y \$ 669.237,18 (pesos seiscientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y siete, con dieciocho centavos) respectivamente, que fueron depositados por la nombrada y por órdenes de Arcioni, los días 10 de noviembre y 8 de diciembre de ese mismo año, en la cuenta corriente que la sociedad 'Compañía de Recaudaciones S.A.' pose en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación Argentina, con conocimiento de que provenían de un ilícito anterior, la simulación dolosa de pago (...), y a sabiendas de que las firmas del endosante Alejandro Benvenuto, insertas al dorso de dichos cartulares eran falsas.

Asimismo, se le imputó haber intervenido en la falsificación de la cesión de créditos y derechos sobre el cheque N° 98733493, a partir de la cual el cartular de mención fue cedido de 'Nidera S.A.' a favor de Compañía de Recaudaciones S.A., merced a la falsificación de las firmas atribuidas a Alejandro Benvenuto, certificadas como auténticas y puestas en presencia del notario Miguel Roque Solanet. Pues, la cesión en cuestión según su lectura-habría sido celebrada el 27 de septiembre de 2011, pese a que el cheque fue librado el 3 de noviembre de 2011, con lo cual puede considerarse que conocía las falsedades que aquejaban al instrumento y, sin embargo, estampó su firma para perfeccionar la cesión y así poder transformar el cheque en dinero en efectivo."

Por último, se le atribuye a **Miryam Graciela Núñez** "Haber recibido de Hernán Arcioni, en fechas incierta pero próximas al 24 de agosto y 23 de septiembre, ambos de 2011 y con ánimo de lucro, dos (2) cheques librados por la sociedad 'Supermercados Mayoristas Makro S.A.' a favor de la firma 'Nidera S.A.', del Banco Santander Río (cta. cte. 423-000008/6). El primero N° 98731764, librado el 24 de agosto





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

de 2011, 'cruzado y no a la orden', por la suma de \$ 2.317.146,00 (pesos dos millones trescientos diecisiete mil ciento cuarenta y seis pesos), mientras que el segundo N° 98732527, fue librado el 23 de septiembre de 2011, 'cruzado y no a la orden', por la suma de \$ 7.734.604,90 (pesos siete millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos cuatro pesos, con ochenta centavos), y ambos depositados por la nombrada por órdenes de Arcioni, en la cuenta corriente que la sociedad Beilán S.A. tiene en la sucursal plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina los días 15 y 28 de septiembre de 2011, con conocimiento de que provenían de un ilícito anterior, que es la simulación dolosa de pago 8(...), y a sabiendas de que las firmas del endosante Alejandro Benvenuto, insertas al dorso de los cartulares eran falsas.

Además, se le atribuye haber intervenido en la falsificación de la cesión de créditos y derechos sobre el cheque nro. 98732527, fechada el 27 de septiembre de 2011, a través del cual 'Nidera S.A.' cedió dicho cartular a favor de 'Beilan S.A.', merced a la falsificación de las firmas atribuidas a Alejandro Benvenuto, certificadas como auténticas y puestas en presencia del notario Miguel Roque Solanet.

Pues, Núñez, en su carácter de presidenta y apoderada de 'Beilán S.A.', firmó la cesión del cartular N° 98732527, teniendo pleno conocimiento de que la firma atribuida a Alejandro Benvenuto era falsa, y sin embargo, perfeccionó el instrumento en cuestión con el propósito de dotarlo de legitimidad y contar con un instrumento extrínsecamente apto para iniciar un eventual reclamo ante la falta de pago del cartular."

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

En cuanto a la calificación legal atribuida, el acusador público entendió que la conducta desplegada por **Boschetto** se correspondía con el delito de falsedad ideológica de instrumento público, reiterado en tres ocasiones, los cuales concurren realmente entre sí, en calidad de autor.

A su turno, calificó la de **Aprilanti** constitutiva del delito de encubrimiento por receptación dolosa, agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro, reiterado en cuatro ocasiones, que concurren realmente entre, en calidad de autora, y participe necesaria del delito de falsificación de documento público, reiterado en tres ocasiones, que concurren realmente entre sí y, a su vez, con las conductas de encubrimiento mencionadas.

Finalmente, entendió que los comportamientos anteriormente descriptos desplegados por **Cantisano** y **Núñez** se correspondían con el delito de encubrimiento por receptación dolosa, en carácter de participes necesaria, agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro, reiterado en dos ocasiones, que concurren realmente entre sí y con el delito de falsificación de documento público en calidad de autoras.

Previo ingresar al análisis de las peticiones, corresponde decir que, dentro del esquema de la ley 27.743, el art. 3 se refiere a las obligaciones incluidas en el régimen allí previsto. El art. 4 alude a las situaciones excluidas. El art. 5 trata los supuestos de extinciones de la acción penal.

Sin perjuicio de una mejorable técnica legislativa, no caben dudas de que los delitos atribuidos a **Aprilanti**, **Cantisano**, **Núñez** y **Boschetto** no se encuentran incluidos en la amnistía prevista en la ley. En tal sentido, no tienen conexión con el incumplimiento de las obligaciones tributarias, salvo que se fuerce una interpretación que concluya que se trató de toda una maniobra que buscó





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

defraudar a Makro y a la AFIP. Pero hemos visto que la defraudación a la empresa no ha sido relatada en las indagatorias, ni en el procesamiento o en el requerimiento de elevación a juicio.

De igual modo, y atendiendo a las circunstancias de la causa, el delito común atribuido a los nombrados no guarda una relación de concurso ideal o aparente con la simulación dolosa de pago atribuida a los otros imputados, como así tampoco se ve entre los delitos una relación de concurso real de medio a fin, por lo que no podría verificarse allí una conexión en los términos legales. Se trata, como dijo la Agencia Federal de Ingresos Públicos, de delitos independientes entre sí.

De hecho, las conductas atribuidas a **Boschetto, Núñez, Cantisano y Aprilanti**, no tienen como perjudicado al organismo recaudador. De ese modo, debe tenerse en cuenta que el perjuicio generado a partir de los comportamientos endilgados no se vería satisfecho por el cumplimiento de una obligación tributaria irregular.

En línea con lo anterior, de la lectura del Régimen de Regulación Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social se desprende que sus beneficios se encuentran supeditados a, justamente, la regulación de una obligación tributaria incumplida o bien que esta haya sido cancelada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Por lo que resulta incompatible que aquellas personas que no se encuentran imputadas por un delito de esas características se vean alcanzadas por una norma dirigida a, por un lado, la recaudación y, por el otro, al "perdón" del mal contribuyente.

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

La interpretación de la defensa de los nombrados permitiría llegar al absurdo caso de que se considere también dentro de la amnistía el homicidio perpetrado por quien mata a otro para ocultar los rastros de un delito tributario alcanzado por la ley, lo cual afectaría de manera sustancial sus efectos.

Es por todo lo expuesto que entiendo que no corresponde hacer extensivo a los imputados **Horacio Emilio Boschetto, Diana Miriam Apilanti, Wanda Georgina Cantisano y Miryam Graciela Núñez**, los efectos de la extinción de la acción penal prevista en el artículo 5° de la ley 27.743.

III. Del pedido de apartamiento de la Agencia Federal de Ingresos Públicos de su rol como parte querellante.

Por otra parte, en sus presentaciones, las defensas han solicitado que se aparte a la querella del proceso, bajo el fundamento de que su actuación se encontraba supeditada a la existencia de una figura que guardara relación con su función, es decir, un delito tributario.

Sin embargo, debo decir que, al momento de tomar esta decisión, todavía se encuentran reunidos los requisitos previstos en el artículo 82 y ss. del CPPN que facultan a la Agencia Federal de Ingresos Públicos a querellar en el marco de este proceso.

Cabe señalar que, para fundamentar sus pretensiones, las defensas han hecho alusión al bien jurídico tutelado y consideraron que, al proceder la extinción de la acción penal por un delito tributario la AFIP perdería la legitimidad procesal activa que determina el código de procedimiento.

No obstante, entiendo que el bien jurídico no se erige como un elemento definitorio para determinar la capacidad de una persona -física o jurídica- de constituirse como querellante en un proceso.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

Este criterio ha sido sostenido por la Cámara Federal de Casación Penal al decir que "El 'damnificado', en cambio, si bien no es el titular del bien jurídico afectado por el ilícito, es quien ha recibido un perjuicio real y concreto que lo habilita para accionar. De este modo, no se protege solamente el bien jurídico tutelado por la norma penal y que aparece violado por la conducta que constituye el contenido de la imputación, sino que no quedan excluidos aquellos bienes garantizados secundaria o subsidiariamente..."(conf. Sala IV, causa n° 1379 caratulada "Gómez, Jorge Ernesto s/recurso de casación", reg. 1946/99, rta. el 15/7/99 -el resaltado nos pertenece-).

La doctrina que fluye del pronunciamiento precedentemente citado coincide con lo que al respecto señala D'Albora, en cuanto a que "...la invocación del bien jurídico protegido para determinar la legitimación procesal activa no resulta una pauta definitoria, puesto que no se ha de excluir la protección subsidiaria de otros bienes garantidos, siempre que derive un perjuicio directo y real, quien lo sufre se encuentra legitimado para ejercer el rol de querellante..." ('Código Procesal Penal', 4° edición, Ed. Abeledo Perrot, 1999, pág. 177)." (cfme. Fallo de la causa N° CPE 990000201/2005/TO1/2/CFC1 "Michanie, Valentina Rebeca y otros s/recurso de casación")

Además, su apartamiento implicaría vedar al órgano recaudador de la posibilidad de ejercer su derecho de intervenir en la etapa recursiva (artículo 456 del Código

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

Procesal Penal de la Nación y concordantes), por ende, un temperamento en ese sentido resultaría contrario a derecho.

Así voto.

El juez Esteban Carlos Rodríguez Eggers y la jueza Nada Flores Vega dijeron:

Que adhieren al voto que antecede, por compartir en lo sustancial sus argumentos y conclusiones.

De acuerdo con lo expuesto, este tribunal;

RESUELVE:

I. DECLARAR EXTINGUIDA la acción penal en la presente **causa FSM 33000384/2011/TO1 y su acumulada FSM 33000384/2011/TO2 (registros internos 3641 y 3752)**, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5° de la ley 27.743 respecto de **HECTOR DANIEL BENITEZ**, de las demás condiciones personales mencionadas en autos, y, en consecuencia, **SOBRESEERLO** con relación al hecho por el cual fuera requerida la presente causa a juicio y que fuera calificado como simulación dolosa de pagos (arts. 11 de la ley 24.769, 59, inciso 2°, del Código Penal de la Nación, 336, inciso 1°, del Código Procesal Penal de la Nación).

II. ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares que le fueran impuestas a **HECTOR DANIEL BENITEZ**, en el marco de este proceso.

III. DECLARAR EXTINGUIDA la acción penal en la presente **causa FSM 33000384/2011/TO1 y su acumulada FSM 33000384/2011/TO2 (registros internos 3641 y 3752)** de conformidad con lo dispuesto en el art. 5° de la ley 27.743 respecto de **CÉSAR LUIS GALEANO**, de las demás condiciones personales mencionadas en autos, y, en consecuencia, **SOBRESEERLO** con relación al hecho por el cual fuera requerida la presente causa a juicio y que fuera calificado como simulación dolosa de pagos (arts. 11 de la ley 24.769, 59, inciso 2°, del Código Penal de la Nación, 336, inciso 1°, del Código Procesal Penal de la Nación).

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE
SAN MARTIN

IV. **ORDENAR** el levantamiento de las medidas cautelares que le fueran impuestas a **CÉSAR LUIS GALEANO**, en el marco de este proceso.

V. **DECLARAR EXTINGUIDA** la acción penal en la presente **causa FSM 33000384/2011/TO1 y su acumulada FSM 33000384/2011/TO2 (registros internos 3641 y 3752)**, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5° de la ley 27.743 respecto de **MARÍA DEL CARMEN SANTELLÁN**, de las demás condiciones personales mencionadas en autos, y, en consecuencia, **SOBRESEERLA** con relación al hecho por el cual fuera requerida la presente causa a juicio y que fuera calificado como simulación dolosa de pagos (arts. 11 de la ley 24.769, 59, inciso 2°, del Código Penal de la Nación, 336, inciso 1°, del Código Procesal Penal de la Nación).

VI. **ORDENAR** el levantamiento de las medidas cautelares que le fueran impuestas a **MARÍA DEL CARMEN SANTELLÁN**, en el marco de este proceso.

VII. **DECLARAR EXTINGUIDA** la acción penal en la presente **causa FSM 33000384/2011/TO1 y su acumulada FSM 33000384/2011/TO2 (registros internos 3641 y 3752)**, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5° de la ley 27.743 respecto de **HEBE LEONOR COLLI**, de las demás condiciones personales mencionadas en autos, y, en consecuencia, **SOBRESEERLA** con relación al hecho por el cual fuera requerida la presente causa a juicio y que fuera calificado como simulación dolosa de pagos (arts. 11 de la ley 24.769, 59, inciso 2°, del Código Penal de la Nación, 336, inciso 1°, del Código Procesal Penal de la Nación).

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371

VIII. ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares que le fueran impuestas a **HEBE LEONOR COLLI**, en el marco de este proceso.

IX. RECHAZAR los pedidos de extinción de la acción penal formulados en favor de **HORACIO EMILIO BOSCHETTO, DIANA MIRIAM APILANTI, WANDA GEORGINA CANTISANO Y MIRYAM GRACIELA NÚÑEZ**.

X. MANTENER a la Agencia Federal de Ingresos Públicos en su rol de parte querellante de este proceso.

XI. Notifíquese, publíquese, regístrese y comuníquese a los organismos correspondientes una vez que adquiera firmeza.

Ante mí.

Fecha de firma: 30/08/2024

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATIAS ALEJANDRO MANCINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: KARINA SOFIA REBOTTARO, SECRETARIO DE CAMARA



#32934620#425131582#20240830130034371